

	JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI
Cali	Veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 470

MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (LESIVIDAD)
DEMANDANTE	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES
DEMANDADO	CECILIA DAZA GALLEGO
RADICADO	76001-33-33-009-2021-00177-00

I. Asunto:

Procede el Despacho a decidir de fondo la solicitud de medida cautelar presentada por la parte demandante.

II. Antecedentes:

Mediante auto de sustanciación nro. 535 del 02 de septiembre de 2021, se ordenó correr traslado a la señora **Cecilia Daza Gallego** de la solicitud de medida cautelar invocada por la **Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones**¹.

El extremo pasivo, dentro de la oportunidad procesal, se abstuvo de emitir algún pronunciamiento al respecto.

III. De la solicitud realizada por la parte demandante:

Dentro del acápite del libelo introductorio, denominado: **“MEDIDA CAUTELAR”**²; la parte demandante solicitó la suspensión provisional de los efectos jurídicos de las Resoluciones nro. SUB 127746 del 16 de junio de 2020 y SUB 211857 del 02 de octubre de 2020, a través de la cual se reconoce una pensión de vejez y, de manera posterior, un retroactivo pensional a la señora Cecilia Daza Gallego por un valor superior al que legalmente le corresponde.

Lo anterior, teniendo en cuenta los siguientes argumentos:

Que a la demandada se le reconoció una pensión de vejez, de conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, sin embargo, la mesada pensional arrojó un valor superior al que legalmente correspondía aplicando la norma correcta.

Que mediante Resolución SUB 127746 del 16 de junio de 2020, se reconoció una pensión de vejez a favor de la señora **Cecilia Daza Gallego** bajo los parámetros de la Ley 797 de 2003, con base en 1329 semanas en cuantía de \$1.582.749 y efectividad a partir del 01 de julio de 2020.

¹ Anexo nro. 006 del expediente digital.

² Anexo nro. 002 del expediente digital.

Que con el acto administrativo contenido en la Resolución nro. SUB 211857 del 02 de octubre de 2020, se modificó parcialmente la Resolución nro. SUB127746 del 16 de junio de 2020, en el sentido de reconocer un retroactivo pensional por valor de \$25.845.857 con una mesada por valor inicial de \$1.524.806 a partir del 09 de enero de 2019.

Que de manera posterior, se solicitó actualización de la historia laboral de la afiliada y, en respuesta se informa que la historia laboral se encuentra consistente con 1334 semanas, seguidamente, al realizar la nueva liquidación de la prestación, se evidencio una disminución en la mesada pensional, lo anterior porque en la actualización realizada a la historia laboral se incluyeron ciclos cotizados por la demandada que no fueron tenidos en cuenta en el reconocimiento inicial, siendo este ciclo 2016/06 aumentando el número de semanas a 1334. Por lo tanto, al reliquidar el IBL de los últimos 10 años laborados con la inclusión del IBC del ciclo 2016/06, se presentó una disminución tanto del IBL calculado como de la tasa de reemplazo liquidada.

Que frente a la Resolución SUB 211857 del 02 de octubre de 2020, por medio de la cual se reconoció el retroactivo de la pensión de vejez por valor de \$25.845.857, no se encuentra ajustada a derecho, en lo concerniente al valor de la mesada inicial tomada en cuenta para la liquidación del retroactivo, toda vez que el valor correcto de la mesada a 2019, corresponde a la suma de \$1.514.362 y se liquidó con una mesada por valor de \$1.524.806 a 2019.

Que el retroactivo real a reconocer con la mesada correctamente liquidada a 2019 por valor de \$1.514.362 y a 2020 por valor de \$1.571.908, corresponde a los siguientes rubros:

LIQUIDACION RETROACTIVO (09/01/2019 - 30/06/2020)	
CONCEPTO	VALOR
Mesadas	\$27.199.962
Mesadas Adicionales	\$1.514.362
Descuentos en Salud	\$3.046.00
Valor a Pagar	\$25.668.324

Que la señora **Cecilia Daza Gallego** tendría derecho a una mesada de pensión de vejez por un valor de \$1.571.908 a fecha 2021, la cual es inferior a la que percibe en nómina de pensionados por la suma de \$1.582.749.

Que resulta evidente que hay un detrimento financiero de **Colpensiones**, entidad que administra las cotizaciones de todos los colombianos. En consecuencia de lo anterior, trae a colación el artículo 48 de la Constitución modificado por el acto legislativo 01 de 2005 y la sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B del 31 de octubre de 2019, radicada bajo el nro. 25000-23-42-000-2017-01812-01 (1496-19).

En consideración a lo expuesto, consideró procedente el decreto de la suspensión provisional alegada y, en consecuencia, se ordene el ajuste pensional conforme a derecho, el cual asciende a la suma de \$1.571.908.

IV.- Oposición a la medida:

La señora **Cecilia Daza Gallego** no presentó oposición a la medida.

V.- Consideraciones:

Radicación: 76001-33-33-001-2021-00177-00

En principio, debe señalarse que, el artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo consagró la procedencia de las medidas cautelares, así:

“Artículo 229. Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo. ...”

Así mismo, el artículo 231 *ibídem* determinó cuales son los requisitos para decretar las medidas cautelares, estableciendo lo siguiente:

“Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud” (Subrayas del Despacho).

Conforme a las normas antes descritas, es claro que, en primer lugar, la medida cautelar se debe solicitar con fundamento en el mismo concepto de violación de las disposiciones invocadas en la demanda (siempre que a él se haga remisión expresa en la respectiva solicitud) o con fundamento en el escrito en que se realice la petición de la medida cautelar de forma separada, el cual debe contener una sustentación específica y propia para la procedencia de la medida cautelar y, en segundo lugar, la procedencia de la suspensión provisional de los efectos de un acto que se acusa de nulidad puede acontecer si, la violación de las disposiciones invocadas, surge, es decir, aparece presente, desde esta instancia procesal – cuando el proceso apenas comienza-, como conclusión del: i) *análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas*, o, ii) *del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud*, sin que la decisión que asuma el Juez, implique un prejuzgamiento³.

De otro lado, es importante resaltar que, en lo concerniente a la suspensión de una decisión de la administración, la parte que así lo requiera debe cumplir unos requisitos mínimos, entre los cuales se encuentra la sustentación debida de su solicitud, lo cual puede hacer, en el mismo escrito inicial o en el escrito que de ella haga de manera separada.

En este punto es menester señalar, que frente a la sustentación de la medida cautelar el Tribunal de Cierre de la Jurisdicción Administrativa ha indicado, que si bien el actual Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo habilita al juez de conocimiento para decretar la misma a partir de la confrontación que haga entre el acto, las normas invocadas como trasgredidas y las pruebas allegadas para tal fin, lo cierto es que la parte que pretenda hacer valer dicha figura jurídica debe cumplir con una mínima carga procesal que le permita al administrador judicial tener la claridad suficiente para llevar a cabo aquella valoración tanto normativa como probatoria que exige la norma en mención; es decir, que se debe indicar de forma precisa y concreta las disposiciones que se consideran

³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente: Guillermo Vargas Ayala. Auto de 3 de diciembre de 2012, exp. 11001-03-24-000-2012-00290-00.

Radicación: 76001-33-33-001-2021-00177-00

infringidas, llevando a cabo la debida explicación o sustentación de los motivos por los cuales considera que se vulneran las mismas⁴.

Lo anterior, tiene como soporte garantías de rango constitucional como el derecho de defensa y contradicción de la parte contra la cual se aduce la respectiva medida cautelar, teniendo en cuenta que es a partir de los argumentos que refiera la parte solicitante, que el otro extremo litigioso tiene la oportunidad de pronunciarse frente a lo deprecado; amén de que, también representa para el operador judicial el punto de partida para identificar la controversia y definir si es necesario ordenar una medida previa con el fin de asegurar el objeto del respetivo medio de control.

Así las cosas, se tiene que para el caso de la suspensión de actos administrativos, dicha Corporación ha señalado que la sola afirmación de un presunto desconocimiento del ordenamiento jurídico no puede tenerse como válido para acceder a una medida en dicho sentido:

“(…) debe ponerse de relieve que la sustentación de la solicitud de suspensión provisional no constituye un exceso ritual, se trata de la observancia de una carga procesal en cabeza de la actora cuyo cumplimiento es el deber constitucional de colaboración para el buen funcionamiento de la administración de justicia y a su vez la carga que exige la ley para que, entre otras, se garantice el derecho de defensa de la entidad que expidió el acto.

*A propósito del derecho de defensa de la entidad demandada, no se puede perder de vista que la nueva codificación trajo consigo la obligación de correr traslado a la parte demandada de la solicitud de suspensión, en ese orden, **la carga impuesta para que se sustente la medida también se encuentra dirigida a que la entidad que profirió el acto conozca a ciencia cierta las razones esgrimidas por el actor para poder ejercer eficientemente su derecho de defensa. En ese contexto, no puede tenerse como sustentación de la medida cautelar la sola afirmación de que el acto administrativo desconoce normas de rango superior**”⁵ (Negrillas y Subrayas del Despacho).*

Tomando como marco de reflexión lo expuesto en precedencia, es claro que se debe exigir a quien solicita una medida cautelar, una carga en cuanto al sustento y pruebas sobre la violación de las normas que considera vulneradas, para que se pueda efectuar en debida forma el debate en ese primer momento procesal.

Por otro lado, es del caso resaltar que el Despacho no desconoce que el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011 establece que la cautela de suspensión de un acto procederá “*por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado*”, no obstante, es claro que no debe confundirse la sustentación que respecto a la demanda debe hacer la parte actora, con la carga argumentativa que debe cumplirse al momento de solicitar una medida cautelar; es decir, que si el accionante decide presentar la solicitud de la medida en el mismo escrito de la demanda, debe sustentar en debida forma la misma o en su defecto, efectuar una expresa remisión a que el apoyo de la medida se soporta en el concepto de violación advertido en el libelo inicial⁶.

⁴ Auto del 21 de octubre de 2013, Rad. 11001 0324 000 2012 00317 00, C.P. Dr. GUILLERMO VARGAS AYALA

⁵ Ibídem.

⁶ Consejo de Estado, Sección Quinta, auto del 3 de marzo de 2016, radicación Nº 11001-03-28-000-2016-00007-00 (2016-00007-00) C.P. dr. Alberto Yepes Barreiro, Consejo de Estado, Sección Quinta, auto del 26 de noviembre de 2015, radicación Nº 11001-03-28-000-2015-00023-00 C.P. dra. Lucy Jeannette Bermúdez, Consejo de Estado, Sección Quinta, ii) auto del 26 de noviembre de 2015, radicación Nº 11001-03-28-000-2015-00026-00 C.P. dra. Lucy Jeannette Bermúdez, Consejo de Estado, Sección Quinta, iii) auto del 4 de febrero de 2016, radicación Nº 11001-03-28-000-2016-

Aunado a lo expuesto, debe decirse que el Órgano de cierre de lo Contencioso Administrativo⁷, ha indicado que:

“(…) La Constitución Política en el artículo 238⁸ otorgó a la jurisdicción de lo contencioso administrativo la facultad de suspender provisionalmente, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial.

El legislador en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011-, amplió el catálogo de las medidas cautelares que en la Constitución Política⁹ y en el Código Contencioso Administrativo – Decreto 01 de 1984,¹⁰ se referían únicamente a la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo demandado, por uno más extenso de naturaleza preventiva, conservativa, anticipativa o de suspensión.

En cuanto a la oportunidad para solicitarlas indica el artículo 229¹¹ del CPACA que, las medidas cautelares proceden antes de que se notifique el auto admisorio y en cualquier etapa del proceso, con el fin proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.

Así mismo el artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, prevé que la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos procede por vulneración de las disposiciones invocadas en la demanda o en la respectiva solicitud, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. De manera que, su procedencia está determinada por la transgresión del ordenamiento jurídico y la necesidad de proteger provisionalmente la legalidad, mientras se profiere la decisión definitiva. La norma señala expresamente lo siguiente: (…)

Según la regla precedente, podrá decretarse la medida cautelar cuando se cumplan los siguientes requerimientos: a) que así lo solicite y fundamente en debida forma la parte interesada en la demanda o con escrito anexo a la misma; b) que la infracción al ordenamiento jurídico surja de la valoración que se haga al confrontar el acto con las normas invocadas por el actor; c) o que emerja de los medios de prueba aportados por el interesado y, d) si se trata de un medio de

00003-00, C.P. dr. Carlos Enrique Moreno, Consejo de Estado, Sección Quinta, iv) auto del 7 de septiembre de 2015, radicación N° 11001-03-28-000-2015-00020-00, C.P. dr. Carlos Enrique Moreno, Consejo de Estado, Sección Quinta y v) auto del 5 de junio de 2015, radicación N° 11001-03-28-000-2014-00129-00 CP. Lucy Jeannette Bermúdez.

⁷ Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección B Consejero ponente: César Palomino Cortés, providencia del quince (15) de noviembre de dos mil dieciséis (2016) Radicación número: 11001-03-24-000-2014-00032-00(3007-14).

⁸ Constitución Política. Artículo 238. La jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá suspender provisionalmente, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial.

⁹ Constitución Política, artículo 138.

¹⁰ Decreto 01 de 1984, artículo 152.

¹¹ Artículo 229. Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo.

La decisión sobre la medida cautelar no implica prejulgamiento.

Parágrafo. Las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos y en los procesos de tutela del conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se regirán por lo dispuesto en este capítulo y podrán ser decretadas de oficio.¹¹

Radicación: 76001-33-33-001-2021-00177-00

control de nulidad y restablecimiento del derecho, que se acredite, de manera sumaria, los perjuicios que se alegan como causados.

Debe indicarse como la jurisprudencia ha resaltado, que la decisión sobre la medida cautelar de ningún modo implica prejuzgamiento, teniendo en cuenta que, se trata de «mecanismos meramente cautelares, que en nada afectan ni influyen en la decisión final del fondo del asunto»¹².

De conformidad con el aparte jurisprudencial y las normas citadas, la procedencia de la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos, requiere la concurrencia de los siguientes presupuestos:

- Que se trate de proceso de naturaleza declarativa.
- Que la medida cautelar se torne necesaria para proteger y garantizar, de manera anticipada y provisionalmente, el objeto del proceso.
- Que la violación surja de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud cautelar, por confrontación del acto administrativo demandado con las normas señaladas y las pruebas que soportan la solicitud.
- Prueba siquiera sumaria del perjuicio, en los asuntos de nulidad y restablecimiento del derecho.

Acorde con lo anterior, es a partir del análisis de los fundamentos de derecho y concepto de violación que se anuncian como trasgredidas con la expedición de los actos cuyos efectos de solicita suspender, y/o del material probatorio allegado al proceso hasta la instancia procesal de la solicitud, que el juez debe determinar si resulta viable el decreto de la medida cautelar de suspensión provisional.

VI. Análisis del caso:

En primer lugar, debe precisarse que si bien, la procedencia de la medida cautelar se justifica por la contravención palmaria y evidente del ordenamiento jurídico, para demostrar dicha situación la parte interesada debe efectuar un análisis de las disposiciones que se señalan infringidas con la decisión de la administración y acreditar probatoriamente la vulneración legal.

En este contexto, es claro que, para considerar la prosperidad de la solicitud de medida cautelar de suspensión del acto administrativo demandado, a la luz de lo consagrado en la Ley 1437 de 2011, es necesario que se acrediten de manera concurrente los cuatro presupuestos referenciados en líneas anteriores.

¹² Así lo sostuvo la Sala en la providencia de 11 de marzo de 2014 (Expediente núm. 2013 00503. Consejero ponente: doctor Guillermo Vargas Ayala), al expresar que: “Con el ánimo de superar los temores y las reservas que siempre acompañaron a los Jueces respecto del decreto de la suspensión provisional en vigencia de la legislación anterior, célebre por su escasa efectividad producto de las extremas exigencias que la Jurisprudencia le impuso para salvaguardar su imparcialidad, el inciso segundo del artículo 229 del C.P.A.C.A. expresamente dispone que ‘[l]a decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento’. De lo que se trata, entonces, con esta norma, es de brindar a los Jueces ‘la tranquilidad de que se trata de mecanismos meramente cautelares, que en nada afectan ni influyen en la decisión final del fondo del asunto sub lite’ []. Una suerte de presunción iure et de iure, sobre cómo acceder a la medida no afecta la imparcialidad del Juez ni compromete su capacidad de discernimiento ni poder de decisión, que busca además promover la efectividad del nuevo régimen cautelar introducido.

La Jurisprudencia ya ha ido señalado que este enunciado debe ser visto como un límite a la autorización que se otorga al Juez para que analice los hechos, las pruebas y los fundamentos del caso, pues es evidente que por tratarse de una primera aproximación al asunto este análisis debe ser apenas preliminar, razón por la cual no puede suponer un examen de fondo o ‘prejuzgamiento’ de la causa []. La carga de argumentación y probatoria que debe asumir quien solicita la medida cautelar, garantizan que el Juez tenga suficientes elementos de juicio para emprender esta valoración sin tener que desplegar un esfuerzo analítico propio de la fase final del juicio ni renunciar ni relevarse del examen más profundo que debe preceder a la sentencia”

Radicación: 76001-33-33-001-2021-00177-00

Descendiendo al caso concreto, se tiene que a través de los actos administrativos demandados, contenidos en las Resoluciones nro. SUB 127746 del 16 de junio de 2020 y SUB 211857 del 02 de octubre de 2020, se reconoce una pensión de vejez y, de manera posterior, un retroactivo pensional a la señora **Cecilia Daza Gallego** por un valor superior al que legalmente le corresponde, respectivamente. Este reconocimiento se realizó a partir del 1º de julio de 2020, con una mesada pensional de \$ 1.582.749. Así mismo, se tuvo en cuenta las semanas cotizadas hasta el mes de mayo de 2018, lo cual correspondió a 1329 semanas cotizadas, con un IBL de \$ 2.469.573 y, la cual arrojó una mesada pensional de \$ 1.582.749.

Ahora bien, de manera posterior se reconoció un retroactivo pensional a favor de la parte demandada, tomando como base la mesada del 09 de enero de 2019 = \$1.524.806 y con un retroactivo que ascendió a la suma de \$25.845.857.

Así las cosas, se examinará en este caso el cumplimiento o no de los requisitos previstos en la ley, para la procedencia de la medida cautelar de suspensión provisional.

Arguye el demandante, que los actos administrativos demandados violan el artículo 48 de la Constitución Nacional, modificado por el acto legislativo 01 de 2005.

Manifiesta que, en el presente asunto, se ha quebrantado el mentado precepto constitucional, por cuanto se llevó a cabo un reconocimiento de un retroactivo pensional contrariando el ordenamiento jurídico, en la medida en que la liquidación de la pensión de vejez reconocida a favor de la señora **Cecilia Daza Gallego** se incurrió en una inconsistencia al momento de determinarse la mesada pensional, pues ésta se calculó teniendo como base la mesada a 2019, correspondiente a la suma de \$1.524.806 y no como en realidad era \$1.514.362.

Aunado a ello, refirió que la demandada tendría derecho a una mesada de pensión de vejez por un valor de \$1.571.908 a fecha 2021, la cual es inferior a la que percibe \$1.585.749.

De los argumentos presentados, encuentra el Despacho que más que discutir la violación a disposiciones invocadas por parte de los actos administrativos demandados contenidos en las Resoluciones nro. SUB 127746 del 16 de junio de 2020 y SUB 211857 del 02 de octubre de 2020, lo que pretende la entidad con la medida cautelar, es suspender el pago de una pensión devengada por la demandada al considerar que la liquidación de la misma contraviene la disposición inicialmente mencionada.

Ello, si se tiene en cuenta que, al solicitar la **Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones E.I.C.E.** a esta instancia judicial la suspensión de los efectos de los actos de reconocimiento pensional, implícitamente se requiere la interrupción del pago total de la correspondiente mesada pensional que devenga en la actualidad la señora **Cecilia Daza Gallego**.

Al respecto, se considera que suspender el pago de la pensión de vejez reconocida a favor de la señora **Cecilia Daza Gallego**, por parte de la **Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones**, en esta primera instancia del proceso podría perjudicar, en parte el derecho al mínimo vital del que gozan las personas de la tercera edad; más aún, si se tiene en cuenta que el asunto sometido a discusión no corresponde al derecho pensional que ostenta la demandada sino que corresponde a la forma en que la entidad accionante efectuó la liquidación de la misma, aspecto que debe ser determinado previa valoración de las pruebas recaudadas en el curso del proceso.

Por tanto, se considera que las afirmaciones planteadas por la **Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones**, llevan implícita la suspensión de la obligación de pagar el 100% de la pensión de vejez reconocida a favor de la señora **Cecilia Daza**

Radicación: 76001-33-33-001-2021-00177-00

Gallego, lo cual no estaría acorde con las pretensiones de la demanda, pues no se cuestiona como tal el derecho pensional otorgado sino la forma en que se calculó su mesada pensional; aspecto que requiere de un análisis probatorio que trasciende el contenido del acto administrativo que se demanda.

Acceder en este momento procesal a la suspensión provisional de los efectos jurídicos de las Resoluciones nro. SUB 127746 del 16 de junio de 2020 y SUB 211857 del 02 de octubre de 2020, podría constituir una decisión desproporcionada y contraria a los postulados constitucionales, pues en caso de encontrarse acreditado que al momento de efectuarse el reconocimiento pensional se incurrió en una inconsistencia o en un error aritmético al momento de establecer el ingreso base de liquidación, se debe estudiar la procedencia o no de un reajuste pensional, sin conllevar tal controversia a desconocer el derecho pensional reconocido a su favor, tal como se pretende con la solicitud de la medida provisional referida, solicitud que finalmente resulta contraria a las pretensiones de la demanda y a los fundamentos facticos del caso concreto.

De otro lado, la entidad demandante de igual manera pide como consecuencia de la mentada suspensión que, se ordene el ajuste pensional conforme a derecho en cuantía de \$1.571.908.

Con respecto a esta solicitud, debe decirse que si bien **Colpensiones** arribó el expediente administrativo pensional de la parte actora que obra en esa entidad, lo cierto es que no se cuenta con la totalidad del material probatorio requerido, a efectos de determinar si dicha entidad incurrió en un error al realizar la liquidación del IBL con el cual se procedió al cálculo de la mesada pensional de la señora **Cecilia Daza Gallego**.

En definitiva, en sentir de esta juzgadora, resulta indispensable realizar un análisis jurídico en torno a las disposiciones señaladas, acompañado de la práctica y valoración probatoria de la afirmación de ambos extremos, ajeno a este momento procesal, para decidir si se están violando la norma mencionada o si la motivación se ajustó al ordenamiento jurídico, sin que lo expuesto implique un prejuzgamiento y de contera, la violación del debido proceso de cara al derecho de defensa de las partes.

Así las cosas, se negará lo solicitado, habida cuenta que es indispensable realizar un minucioso análisis que, en sentir del Despacho, corresponde al momento de emitir sentencia de fondo, amén de que, no se cumplen los requisitos establecidos para tal fin.

Finalmente, se advierte que no se encuentra demostrada la existencia de un perjuicio irremediable, toda vez que el apoderado judicial de la parte actora al momento de formular la medida de suspensión provisional, no refirió si quiera prueba sumaria para demostrar un detrimento patrimonial que afecte la sostenibilidad financiera de la **Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones E.I.C.E.**

En síntesis, debe hacerse un estudio de fondo, con las pruebas aportadas al plenario, para determinar con certeza si efectivamente la **Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones**, incurrió o no en un error aritmético al momento de efectuarse el reconocimiento pensional, pues esta etapa procesal es apresurada para determinar tal situación y la existencia o no de un detrimento financiero a cargo de la entidad.

Así las cosas, al no encontrarse configurada a partir de un ejercicio de confrontación con la norma superior que se argumenta como violadas, una situación de manifiesto desconocimiento necesaria para decretar la suspensión provisional solicitada, se procederá a negar el decreto de la medida cautelar bajo análisis.

Radicación: 76001-33-33-001-2021-00177-00

En mérito de lo expuesto, el **Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cali**,

RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de suspensión provisional de los actos acusados, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Una vez ejecutoriado este proveído continúese con el trámite del proceso.

TERCERO: Este Juzgado acatando el deber consagrado en el art. 46 de la Ley 2080 de 2021, el cual modificó el artículo 186 de la Ley 1437 de 2011, comunica los canales digitales del despacho y su Oficina de Apoyo, de la siguiente manera:

- ✓ **Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cali:**
Correo electrónico: adm01cali@cendoj.ramajudicial.gov.co
Teléfono: (2) 8962433
- ✓ **Ministerio Público – Procuraduría Judicial 57**
Correo electrónico: procjudadm57@procuraduria.gov.co
- ✓ **Radicación de procesos ordinarios:**
repartoadtivoscali@cendoj.ramajudicial.gov.co
- ✓ **Radicación memoriales:**
of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
- ✓ **Radicación de tutelas y habeas corpus:** URL
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/TutelaEnLinea>

Las líneas telefónicas de la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de Cali son:

Teléfonos: (2) 896-24-12

(2) 896-24-11

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PAOLA ANDREA GARTNER HENAO
JUEZ

Firmado Por:

**Paola Andrea Gartner Henao
Juez
Juzgado Administrativo
Oral 001
Cali - Valle Del Cauca**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

b3164fc2602524ce3aef1efe5290493fcb3e3bf6263e0d6948f657e3d454c95f

Documento generado en 29/09/2021 04:01:45 p. m.

**Valide este documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**